



## **JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE YOPAL**

Yopal, Casanare, dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

**Proceso** : VERBAL  
**Referencia** : 850013103002-2021-00098-00  
**Cuaderno** : EXCEPCION PREVIA  
**Demandante** : CEOGAS ENERGIA S.A.S E.S.P.  
**Demandado** : EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P

### **I. Asunto a decidir**

Procede el Despacho a resolver la excepción previa presentada por el apoderado judicial de la entidad demandada ENERCA S.A. E.S.P.

### **II. Antecedentes**

Dentro del término de contestación de la demanda, el apoderado judicial de la demandada propuso excepciones previas, que se entiende se adecuan al artículo 101 del C.G.P., denominadas falta de jurisdicción y competencia y falta de agotamiento del requisito de procedibilidad.

Argumentando frente a la primera de ellas, que ENERCA S.A. ESP, es una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios de naturaleza mixta donde la Gobernación de Casanare es su mayor accionista con una participación de 98.81%, lo que, la constituye en una entidad pública como lo indica el parágrafo del artículo 104 del CPACA, por lo que, concordante con los numerales 1 y 2 de la misma norma el juez natural para conocer es el Tribunal Administrativo, en razón a la cuantía de las pretensiones y por el lugar donde ocurrieron los hechos la jurisdicción es el departamento de Casanare.

A su turno expone respecto de la segunda excepción, en síntesis, que se trata de un proceso declarativo que se adelantaría conforme el artículo 368 del CGP, lo que hace necesario agotar el requisito de procedibilidad conforme el artículo 38 de la ley 640 de 2001 modificado por el artículo 621 del CGP.

### **III. Traslado de excepciones.**

Del escrito de excepciones se corrió traslado en lista de fecha 22 de junio de 2022 y dentro del término la demandante recorrió el traslado manifestando inicialmente, que, las excepciones dentro de la presente acción no se presentan como recurso, sino conforme el artículo 101 del CGP.

Respecto de la primera excepción refiere no está llamada a prosperar en el entendido que Ley 142 de 1994, determina las empresas de servicios públicos oficiales y mixtas, para lo cual la demandada ENERCA resulta estar dentro de las catalogadas como mixtas, que está sujeta a un régimen de derecho privado, para lo cual cita jurisprudencia del año 1997 y 2007, que refieren, las empresas de servicios domiciliarios son privadas y están sometidas, por regla general, al derecho privado y sus conflictos son dirimibles ante la jurisdicción ordinaria.

En lo que atañe a la segunda excepción, manifiesta no está llamada a prosperar en el entendido que cuando se solicite la práctica de medidas cautelares se podrá acudir directamente al juez, sin

necesidad de agotar la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad y ello no dispone otro requisito como la concreción de las mismas.

#### IV. Consideraciones

Las excepciones previas se caracterizan porque su finalidad primordial es atacar el procedimiento, no la cuestión de fondo del litigio o del derecho controvertido, pueden ser alegadas por el demandado dentro del término del traslado de la demanda, y se encuentran taxativamente consagradas en el artículo 100 del código general del proceso.

Pues bien, frente al asunto que nos convoca debe decirse que han sido muchas las posturas sobre el tema, razón por la cual, el Consejo de Estado profirió sentencia de unificación, así entonces, a voces del Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero ponente Alberto Montaña Plata, expediente 25000-23-26-000-2009-00131-01(42003) que dispone:

45. (...) Sobre el conocimiento, o no, de la jurisdicción de lo contencioso administrativo de controversias de naturaleza contractual o extracontractual de prestadores de los servicios públicos domiciliarios no ha existido una línea unívoca. Sin embargo, recientemente, existe una posición constante, aparentemente ausente de discusión, que encuentra solución en el derecho positivo.

46. El problema tuvo origen en un vacío normativo. En efecto, la Ley 142 de 1994, que contempla un régimen jurídico mixto y prevalentemente privado para los prestadores de estos servicios, nada indicó, en términos generales, sobre el juez de las controversias de los prestadores. En cambio, se limitó a establecer soluciones de competencia para situaciones específicas<sup>1</sup>.

47. Frente a este vacío, y con el trasfondo lógico de la, no poco frecuente, fundamentación histórica de la jurisdicción de lo contencioso administrativo como juez de los servicios públicos, esta Corporación intentó darle solución al problema con tesis no uniformes, aunque construidas en un considerable espacio de tiempo. Con ánimo de síntesis se pueden recoger tres:

48. En un primer momento, se concibió que, como la regla general en servicios públicos domiciliarios era el régimen jurídico privado de sus prestadores, el conocimiento de sus controversias correspondería a la jurisdicción ordinaria. Mientras que, en los casos en los que, excepcionalmente, se tratara de controversias que debían ser resueltas con derecho público, su conocimiento correspondería a la jurisdicción de lo contencioso administrativo<sup>2</sup>.

49. En un segundo momento, exclusivamente respecto de las controversias originadas en contratos, se indicó que cuando los servicios públicos domiciliarios fueran prestados por entidades estatales, se constataba su calidad de contratos estatales especiales ya que, por regla general, no se regían por la Ley 80 de 1993 sino por el derecho privado, situación que no obstaba para que dejaran de ser contratos estatales y el juez de sus controversias la jurisdicción de lo contencioso administrativo<sup>3</sup>. Esta tesis exigía el reconocimiento, por parte del juez, de la naturaleza de entidad estatal (o pública) del prestador de servicios públicos domiciliarios; situación nada pacífica a la luz de la jurisprudencia de entonces<sup>4</sup>

50. Finalmente, y esta corresponde a la posición constante vigente que se adopta en esta sentencia, se construyó una tesis que encuentra fundamento en una solución de derecho positivo: si el problema surge frente a un vacío normativo, todas las situaciones en las que la Ley no sea clara sobre el conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo o de la jurisdicción ordinaria, deben solucionarse de la mano de la norma contentiva de la cláusula general de competencia de la primera, ya que esta existe, entre otras, para

<sup>1</sup> Por ejemplo, en materia de controversias relativas a cláusulas excepcionales, debidamente incorporadas en contratos celebrados por prestadores de servicios públicos domiciliarios (artículo 31) o el ejercicio de prerrogativas propias de las autoridades públicas (artículo 33) dispuso que su conocimiento sería de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Por su parte, para el caso de procesos ejecutivos adelantados por prestadores de servicios públicos domiciliarios para hacer efectivo el pago de sus acreencias (artículo 130) dispuso que su conocimiento sería de la jurisdicción ordinaria.

<sup>2</sup> Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Auto de 23 de septiembre de 1997, exp. S-701.

<sup>3</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto de 8 de febrero de 2001, exp. 16661.

<sup>4</sup> La naturaleza de entidad pública de todas las empresas de servicios públicos donde se constatará la presencia de capital público, fue señalada, primero, por el Consejo de Estado (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 2 de marzo de 2006, exp. 29703) y luego por la Corte Constitucional (Sentencia C-736 de 2007).

cubrir este tipo de lagunas interpretativas<sup>5</sup>. Cabe aclarar que la cláusula general de competencia difiere, evidentemente, de las normas de competencia contempladas en la Ley 142 de 1994.

**51. Respecto del conocimiento de la controversia por parte esta jurisdicción, la cláusula general de competencia, vigente para la época del caso concreto, era el artículo 82 del CCA (hoy contenida en el artículo 104 del CPACA). Esta disposición normativa tenía un talante material que, luego, fue sustituido por uno orgánico, a partir de la reforma que le introdujo la Ley 1107 de 2006, en virtud del cual, si el sujeto prestador del servicio público domiciliario involucrado en la controversia era una entidad pública, el conocimiento de esta correspondería a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.**

52. En el presente caso, la EAAB detentaba la condición de empresa industrial y comercial del orden distrital<sup>31</sup> y, por ende, no existen dudas de su naturaleza pública, motivo por el cual el conocimiento de esta controversia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 del CCA vigente entonces, le corresponde a esta jurisdicción.

53. El Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos en primera instancia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 del CCA.

Esta judicatura constata los presupuestos de la excepción de falta de jurisdicción y competencia, observando que la misma está llamada a prosperar, como quiera que, al obligarse a acudir a la regla general de competencia de la Jurisdicción de lo contencioso administrativo, en el entendido que no existe disposición legal que determine de manera concreta quién debe resolver los litigios que se presenten respecto de la etapa precontractual en los contratos donde actúe una entidad prestadora de servicios públicos, según el asunto bajo estudio, se encuentran reunidas las exigencias para que ésta asuma el conocimiento de la presente acción.

La doctrina y la jurisprudencia han señalado que la responsabilidad precontractual encuadra dentro de la categoría de la responsabilidad extracontractual. Ello, en la medida en que esta responsabilidad se configura cuando el contrato aún no se ha celebrado y puede, incluso, nunca perfeccionarse.<sup>6</sup>

En virtud de lo anterior, artículo 104 del CPACA, prevé que serán de su competencia los asuntos “1. Los relativos a la responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen aplicable.”

Y seguidamente, en el párrafo de la misma obra refiere:

**PARÁGRAFO. Para los solos efectos de este Código, se entiende por entidad pública todo órgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominación; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participación igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o participación estatal igual o superior al 50%.**

Para lo cual, observa el despacho que la demandada, es una empresa de economía mixta, con una participación del Estado superior al 50%, conforme se evidencia en la información suministrada en los canales digitales de ENERCA S.A. E.S.P. y la certificación accionaria expedida según acta No. 22 de marzo de 2017, de la asamblea general de accionistas y libro de accionistas actualizado.

De ahí que deba remitirse el presente proceso por competencia al Tribunal de lo Contencioso administrativo de Casanare, según numeral 5 del artículo 152 y numeral 6 del artículo 156.

<sup>5</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, Auto de 17 de febrero de 2005, exp. 27673.

<sup>6</sup> Esta tendencia se mantiene en la actualidad en la redacción del CPACA: “En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma”.

Por lo expuesto, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Yopal,

**RESUELVE:**

**PRIMERO. DECLARAR** probada la excepción previa de falta de competencia por parte de esta judicatura para conocer del asunto de la referencia, conforme se argumentó en la parte considerati va de esta providencia.

**SEGUNDO.** Una vez notificado y ejecutoriado este auto, REMITASE la actuación para el respectivo reparto ante el Tribunal de contencioso administrativo de Casanare, con el fin de que asuma su conocimiento.

**TERCERO.** HÁGANSE las anotaciones respectivas en los libros radicadores del Juzgado.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**JAVIER ARTURO ROCHA VASQUEZ**

Juez

Firmado Por:

Javier Arturo Rocha Vasquez

Juez

Juzgado De Circuito

Civil 002

Yopal - Casanare

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **fd3bcb3ab9aa8b80a40731022efd6d4e98f1eddcc71cb7a5970f3ae71cfb537d**

Documento generado en 16/09/2022 05:03:32 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**

**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**